

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
QUINTA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CON SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO

SENTENCIA

EXPEDIENTE N° : 3613-2017
DEMANDANTE : CATV SYSTEMS E.I.R.L.
DEMANDADOS : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – Indecopi UNIMPRO
MATERIA : Nulidad de resolución administrativa

***Sumilla:** Ante el uso de un fonograma o copia del mismo con fines comerciales, donde se comunique este al público, corresponde el pago de una remuneración, la cual estará determinada en base a las tarifas que establezca cada entidad de gestión colectiva, las que tendrán efecto una vez que sean publicadas en el diario Oficial El Peruano y otro de mayor circulación nacional. Además de ello, queda claro que la falta de pago de la remuneración, a la que tienen derecho los productores de fonogramas, se configurará como infracción cuando después de la intimación en mora al usuario del fonograma, este no cumpla dentro de plazo de los diez días de intimado con el pago de la remuneración. Queda entendido también, que dicho pago obedece a un mandato legal, y como tal es de obligatorio cumplimiento por parte del usuario de cualquier fonograma, con independencia de los acuerdos respecto al monto de las tarifas a que puedan arribar las entidades de gestión colectiva con los usuarios.*

RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTE

Lima, veinticinco de abril del dos mil veintitrés. -

Con el expediente judicial acompañado de dos tomos del expediente administrativo de la vista de la causa del 14 de abril del año en curso e interviniendo como ponente el señor Juez Superior **Vinatea Medina**, se emite la presente sentencia.

I. EXPOSICIÓN DE LOS AGRAVIOS:

PRIMERO. - Resolución apelada. - Es materia de grado la apelación interpuesta por la parte demandante CATV SYSTEMS E.I.R.L. contra la **sentencia** contenida en la resolución número diez, dictada el 30 de junio de 2022, que declaró **infundada** la demanda del 01 de marzo del 2017 obrante a fojas 68 a 73.

SEGUNDO. - Fundamentos del recurso de apelación. - CATV SYSTEMS E.I.R.L. – en adelante CATV- con escrito de fecha 19 de julio de 2022 de fojas 186 y 187 apela la recurrida señalando como principales argumentos, los siguientes:

- i) Se considera válida la publicación de las tarifas hechas por Unión Peruana de Productores Fonográficos – UNIMPRO, la cual no ha cumplido con ser publicada en el diario oficial El Peruano y otro de mayor circulación nacional como manda la ley.
- ii) Al no haberse cumplido con el requisito de publicidad mal podría aplicarse la cobranza y mucho menos se podría multar por una infracción inexistente.
- iii) Con Unión Peruana de Productores Fonográficos – UNIMPRO se llegó a un acuerdo tarifario el cual empezó a cumplirse el 01 de abril de 2015; por lo que, antes de dicho periodo no corresponde cobro alguno.
- iv) Equivocadamente se menciona que no es necesario un contrato entre las partes, el cual fue suscrito a falta de tarifa oficial, sin haberse tenido en cuenta que lo necesario era que la tarifa sea publicada.

II. ANÁLISIS:

TERCERO. - Constituye materia controvertida al grado:

- i) Establecer si CATV infringió lo dispuesto en el artículo 37 de la Decisión 351 así como los artículos 133 y 137 del Decreto Legislativo.
- ii) Establecer si CATV debió pagar la remuneración de acuerdo al tarifario publicado (para el periodo desde el 01 de julio de 2009 al 14 de marzo de 2012) por el uso de actos de comunicación al público de fonogramas musicales que forman parte del repertorio bajo la administración de Unión Peruana de Productores Fonográficos – en adelante UNIMPRO-.

ANTECEDENTES ADMINSTRATIVOS:

1. Con fecha 07 de junio y 18 de setiembre de 2013, Unión Peruana de Productores Fonográficos – UNIMPRO interpuso una denuncia por infracción a la Ley sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos contra CATV Systems E.I.R.L. por haber efectuado actos de comunicación pública de fonogramas sin haber abonado la remuneración correspondiente, en el periodo establecido entre julio de 2009 hasta marzo de 2012.
2. Mediante resolución de fecha 18 de noviembre de 2013, la Secretaría Técnica de la Comisión de Derecho de Autor admitió a trámite la denuncia.
3. Mediante Resolución N°614-2013/CDA-INDECOPI del 23 de diciembre de 2013 se declaró fundada la denuncia por infracción al artículo 37 de la Decisión 351 concordante con los artículos 133 y 137 del Decreto Legislativo 822, con relación al periodo comprendido entre los meses de julio de 2009 y marzo de 2012; imponiéndose multa de 27.48 UIT; y se ordenó el pago de reparación de omisiones por el monto de S/.50, 843.87.
4. Con fecha 15 de enero de 2014, UNIMPRO interpuso recurso de apelación contra la Resolución N°614-2013/CDA-INDECOPI, por considerar que el monto por reparación por omisiones debió ser establecido en S/ 80,100.00
5. En la misma fecha, CATV interpuso recurso de apelación contra la Resolución N°614-2013/CDA-INDECOPI, por considerar que UNIMPRO se contradice con los montos que exige como pago, que Indecopi consideró documentos insuficientes; y por habersele condenado simultáneamente al pago de costas, costos y multa.
6. Con fecha 12 de noviembre de 2014, UNIMPRO solicitó la suspensión convencional del procedimiento en virtud a las negociaciones que viene realizando con la empresa denunciada.
7. Con fecha 18 de noviembre de 2014 CATV solicitó la suspensión convencional del procedimiento en virtud a las negociaciones que viene realizando con la empresa denunciante.
8. Mediante Resolución N°2377-2015/TPI-INDECOPI de fecha 04 de junio de 2015, la Sala Especializada de Propiedad Intelectual suspendió por el lapso de dos meses, de notificadas las partes con la presente resolución, la tramitación del procedimiento en mérito a que las partes lo habían solicitado.
9. Mediante Resolución N°3801-2016/TPI-INDECOPI de fecha 17 de octubre de 2016, se resolvió levantar la suspensión del procedimiento, y se revocó la Resolución N°614-2013/CDA-INDECOPI en el extremo que ordenó la

sanción de reparación de omisiones a favor de la denunciante, se modificó el monto de la multa y la estableció en 17,8 UIT; confirmó en los demás extremos.

FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA APELADA

Mediante Resolución Diez de fecha 30 de junio del dos mil veintidós se declaró infundada la demanda (fojas 68 a 73) señalando como fundamentos lo siguiente:

1. Dada la naturaleza de la remuneración derivada del fonograma como derecho conexo, que su exigibilidad resulta distinta a la emanada del derecho de autor, más aún, el derecho de remuneración en los derechos conexos nace con el uso del fonograma y no en forma anterior; asimismo, no requiere de una autorización previa y, como se ha indicado, al constituir una obligación única y equitativa al uso, debe determinarse en forma cierta luego de verificada la totalidad de fonogramas empleados por el usuario. En resumen, considerando la protección otorgada a los fonogramas como objeto de derechos conexos, toda persona o institución pública o privada se encuentra en la obligación de satisfacer la remuneración equitativa a su uso, salvo excepción de ley; no obstante, ello no quiere decir que la insatisfacción inmediata de esta obligación constituya *per se* un supuesto de responsabilidad frente al ordenamiento legal.
2. Ahora en cuanto al monto reclamado, se advierte que el Decreto Legislativo N° 822 deja en libertad a las partes para fijar el mismo, sin embargo, señala que, en caso de no existir acuerdo, la remuneración que se perciba deberá ser compartida en partes iguales entre los artistas intérpretes y/o ejecutantes y los productores de fonogramas.
3. Queda claro que los productores de fonogramas tienen derecho a recaudar la remuneración por la utilización secundaria de los fonogramas o de las copias de los mismos, la cual solo será compartida con los artistas, intérpretes o ejecutantes si la legislación interna de los Países Miembros así lo dispone.
4. Por tanto, en virtud de lo dispuesto en los artículos 133° y 137° del Decreto Legislativo N° 822 el pago de las remuneraciones por las comunicaciones públicas de fonogramas deviene de un mandado legal, por lo que no corresponde que medie contrato y/o pacto entre las partes a fin de requerir su pago.

5. En consecuencia, estando a lo señalado, resulta errado el fundamento de la parte demandante al sostener que para cumplir el pago de la remuneración por las comunicaciones públicas de fonogramas tiene que mediar contrato entre las partes; toda vez que el pago de la dicha remuneración deviene de un mandato legal.
6. UNIMPRO adjuntó la publicación de las tarifas generales del 2009 y 2010; en consecuencia, mal hace la demandante al pretender reconocer recién el pago, de las remuneraciones por la comunicación pública de fonogramas, con la firma del convenio, toda vez que el pago de dicha remuneración deviene de una obligación legal, por lo que al haber quedado acreditado que CATV SYSTEMS E.I.R.L efectuó actos de comunicación pública de fonogramas protegidos a través del servicio de televisión por cable denominado “BEST CABLE PERÚ” le correspondía efectuar el pago de la remuneración correspondiente.
7. La modificación de la multa obedece a una debida aplicación del principio de razonabilidad, toda vez que, el Tribunal del Indecopi analizó la multa impuesta en la primera instancia administrativa, tomando en cuenta la naturaleza de la infracción, así como el provecho ilícito obtenido o que pretendía obtener el denunciado con el acto infractor, calificación de la infracción y fin disuasivo, conforme se encuentra establecido en el artículo 186 del Decreto Legislativo N° 822, conceptos que han sido desarrollados en la resolución materia de autos.

CUESTIÓN PREVIA

CUARTO.- Antes de analizar la materia controvertida cabe precisar que en virtud de la doctrina del acto aclarado establecida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante decisiones en los procesos N° 391-IP-2022, 350-IP-2022, 261-IP-2022 y 145-IP-2022, el cual es plenamente compatible con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto el juez nacional de única o última instancia no estará obligado a solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina si es que esa corte internacional ya ha interpretado dicha norma con anterioridad en una interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

En el presente caso, la norma andina mencionada es el artículo 37 de la Decisión N°351, relacionada con el pago de remuneraciones al que tienen derecho los productores de fonógrafos por el uso del fonograma o copias del mismo con fines comerciales, la misma que ya ha sido materia de interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los Procesos N°47-IP-2021 y 120-IP-2022 publicadas el 25 de junio de 2021 y el 04 de noviembre de 2022 respectivamente en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena N°4273 y 5076.

Por consiguiente, conforme a lo decidido por el propio Tribunal de Justicia en los referidos procesos, esta Sala Superior no se encuentra obligada a solicitar interpretación prejudicial sobre dicha norma, motivo por el cual se ha prescindido de enviar al Tribunal del CAN los presentes actuados.

QUINTO. – De acuerdo a lo señalado en el Decreto Legislativo 822, Ley sobre Derecho de Autor, el fonograma está definido como:

***Artículo 2.-** A los efectos de esta ley, las expresiones que siguen y sus respectivas formas derivadas tendrán el significado siguiente:
(...)*

14. Fonograma: Los sonidos de una ejecución o de otros sonidos, o de representaciones digitales de los mismos, fijados por primera vez, en forma exclusivamente sonora. Las grabaciones gramofónicas, magnetofónicas y digitales son copias de fonogramas.

Asimismo, el mismo cuerpo normativo señala respecto a la remuneración que tienen derecho los artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas:

***Artículo 133.-** Los artistas intérpretes o ejecutantes tienen igualmente el derecho a una remuneración equitativa por la comunicación pública del fonograma publicado con fines comerciales que contenga su interpretación o ejecución, salvo que dicha comunicación esté contemplada entre los límites al derecho de explotación conforme a esta Ley. Dicha remuneración, a falta de acuerdo entre los titulares de este derecho, será compartida en partes iguales con el productor fonográfico.*

***Artículo 137.-** Los productores de fonogramas tienen el derecho a recibir una remuneración por la comunicación del fonograma al público, por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos de las comunicaciones lícitas a que se refiere la presente ley, la cual será*

compartida, en partes iguales, con los artistas intérpretes o ejecutantes».
(Énfasis agregado)

Sobre el particular, Delia Lipszyc entiende que productor de fonogramas es la persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa y responsabilidad se fijan por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos. El objeto protegido es la fijación de la interpretación de la obra en un soporte material que se denomina fonograma y que en el artículo 3 literal b) de la Convención de Roma, se define como toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución o de otros sonidos. La Convención protege únicamente las fijaciones sonoras, sea cual fuere el origen de los sonidos, en tal sentido, incluye grabaciones de sonidos que no provienen de una ejecución, como el canto de las aves y otros sonidos de la naturaleza, excluye a las que incorporan imágenes, vale decir, a las obras audiovisuales.¹

Los titulares de los derechos son los productores de fonogramas que fijan por primera vez los sonidos, sean personas naturales o jurídicas. Sus derechos patrimoniales son los de reproducción, distribución, importación y exportación. Igualmente, tienen derecho a percibir una remuneración por las utilidades secundarias de sus fonogramas.²

En lo que respecta a la normativa internacional aplicada al Estado Peruano, tenemos a la Decisión de la Comunidad Andina 351 – Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, en la cual se precisa:

Artículo 37.- Los productores de fonogramas tienen del derecho de:
(...)

d) *Percibir una remuneración por cada utilización del fonograma o copias del mismo con fines comerciales, la que podrá ser compartida con los artistas intérpretes o ejecutantes en los términos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.*

Al respecto el Tribunal de la Comunidad Andina precisa en la interpretación prejudicial 47-IP-2021 en su fundamento 3.7:

3.7. Teniendo en cuenta lo anterior, ninguna persona puede reproducir – sea de forma directa o indirecta -, importar y distribuir fonogramas sin contar con la autorización del productor del mismo. Asimismo, este

¹ LIPSZYC, Delia. Derecho de autor y derechos conexos, ediciones UNESCO- CERLALC- Zavallá, 2006, París, Bogotá y Buenos Aires, pp. 390-391.

² LIPSZYC, Delia. Op.cit. pp.394 a 396.

percibirá una remuneración única por cada utilización de sus fonogramas o copias con fines comerciales.

(...)

3.11 Lo señalado en los párrafos anteriores se encuentra debidamente concordado con lo dispuesto en el Artículo 15 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT o TOIEF por sus siglas en español), el cual dispone que las partes contratantes pueden establecer en su legislación nacional que la remuneración equitativa y única deberá ser reclamada al usuario por el artista intérprete o ejecutante o por el productor de un fonograma o por ambos.

Por su parte la Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión señala en su artículo 12 lo siguiente:

Artículo 12° Cuando un fonograma publicado con fines comerciales o una reproducción de ese fonograma se utilicen directamente para la radiodifusión o para cualquier otra forma de comunicación al público, el utilizador abonará una remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes, o a los productores de fonogramas, o a unos y otros. La legislación nacional podrá, a falta de acuerdo entre ellos, determinar las condiciones en que se efectuará la distribución de esa remuneración.

En lo referente a la entidad encargada de la recaudación de las remuneraciones a las que se hace mención en las normas precitadas, en el artículo 147 del Decreto Legislativo 822, Ley sobre Derecho de Autor se señala:

Artículo 147.- Las sociedades de gestión colectiva estarán legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos, para ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales, sin presentar más título que dichos estatutos y presumiéndose, salvo prueba en contrario, que los derechos ejercidos les han sido encomendados, directa o indirectamente, por sus respectivos titulares. Sin perjuicio de esa legitimación, las sociedades deberán tener a disposición de los usuarios, en los soportes utilizados por ellas en sus actividades de gestión, las tarifas y el repertorio de los titulares de derechos, nacionales y extranjeros, que administren, a efectos de su consulta en su página web y/o sus dependencias. Cualquier otra forma de consulta se realizará con gastos a cargo del que la solicite.

En su artículo 153, señala las obligaciones que tienen estas sociedades de gestión colectiva, en el cual se precisa:

Artículo 153.- Las entidades de gestión están obligadas a:

(...)

f. Mantener a disposición del público, las tarifas generales y sus modificaciones, las cuales, a fin de que surtan efecto, deberán ser publicadas en el Diario Oficial "El Peruano" y en un diario de amplia circulación nacional, con una anticipación no menor de treinta (30) días calendario, a la fecha de su entrada en vigor.

(...)

h. Recaudar las remuneraciones relativas a los derechos administrados, mediante la aplicación de las tarifas previamente publicadas.

Finalmente, el mismo decreto legislativo mencionado, en su artículo 202 precisa:

Artículo 202.- Se considera en mora al usuario de las obras, interpretaciones, producciones, emisiones y demás bienes intelectuales reconocidos por la presente ley, cuando no pague las liquidaciones formuladas de acuerdo a las tarifas establecidas para la respectiva modalidad de utilización, dentro de los diez días consecutivos siguientes a la intimación judicial o notarial.

De las normas y doctrina antes glosadas, es claro que, ante el uso de un fonograma o copia del mismo con fines comerciales, donde se comuniquen estos al público, corresponde el pago de una remuneración, la cual estará determinada en base a las tarifas que establezca cada entidad de gestión colectiva, las que tendrán efecto una vez que sean publicadas en el diario Oficial El Peruano y otro de mayor circulación nacional. Además de ello, queda claro que la falta de pago de la remuneración, a la que tienen derecho los productores de fonogramas, se configurará como infracción cuando después de la intimación en mora al usuario del fonograma, este no cumpla dentro de plazo de los diez días de intimado con el pago de la remuneración. Queda entendido también, que dicho pago obedece a un mandato legal, y como tal es de obligatorio cumplimiento por parte del usuario de cualquier fonograma, con independencia de los acuerdos respecto al monto de las tarifas a que puedan arribar las entidades de gestiones colectivas con los usuarios.

En ese sentido, a efectos de establecer si la demandante infringió lo dispuesto en el Decreto Legislativo 822, corresponde verificar si este cumplió con el pago de las remuneraciones al que hace mención la norma.

SEXTO.- Revisado el tomo I del expediente administrativo, a fojas 32 se advierte la carta notarial de fecha 08 de julio de 2009, donde UNIMPRO le informa a la demandante que de acuerdo a la Resolución N°0000172 -2001/ODA-INDECOPI, ésta es la entidad de gestión colectiva encargada de recaudar de los usuarios la remuneración equitativa y única por la comunicación pública de fonogramas musicales y/o literario musicales a través de radiodifusión o por cualquier forma o procedimiento de comunicación al público. De la misma forma, le manifestaron que al ser usuario que a través de la distribución de señales con contenido protegido que incluye la música como elemento principal o accesorio de la programación que ofrecen, se encuentra obligado a cumplir con la mencionada remuneración, para cuyo fin le alcanzan el tarifario vigente y le solicitan remita los ingresos mensuales por concepto de suscripción de abonados.

Con fecha 27 de noviembre de 2009³, UNIMPRO le reitera mediante carta notarial indiquen a que categoría pertenecen según las horas de uso musical computadas desde el mes de marzo de 2002. Asimismo, con fechas 20 de mayo de 2010 y 21 de febrero de 2011, de fojas 36 y 37, respectivamente, la entidad de gestión colectiva, nuevamente le requiere a la demandante cumpla con el pago de los derechos respectivos en base a la categoría que pertenecen.

Es con fecha 12 de mayo de 2011⁴, que la demandante le informa a UNIMPRO que al no haber suscrito contrato con ella, no tiene la obligación a remitirle la información solicitada, más aún si desconoce el pago de las remuneraciones requeridas.

El 15 de marzo de 2012⁵, UNIMPRO le remite una carta notarial a la demandante intimándola formal y legalmente en mora, requiriéndole el pago inmediato de las liquidaciones correspondientes a la remuneración equitativa y única por la comunicación pública de fonogramas musicales correspondiente al periodo de julio de 2009 a marzo de 2012, que asciende a la suma de S/.94,519.07.

De los documentos antes mencionados, se advierte que la demandante desconoció el pago de las remuneraciones reclamadas por UNIMPRO por

³ A fojas 34 del Tomo I del Expediente Administrativo.

⁴ Fojas 38 y 39, idem.

⁵ Fojas 42, idem.

considerar que no se encontraba obligada a ello al no haber suscrito contrato alguno con dicha entidad. De la misma forma, queda claro que no ha desconocido la difusión de los fonogramas los que hace mención UNIMPRO. Asimismo, no ha negado el hecho de no haber pagado las remuneraciones equitativa y única por la comunicación pública de fonogramas musicales correspondiente al periodo de julio de 2009 a marzo de 2012.

Revisado el tomo II del expediente administrativo, a fojas 351 se advierte que la demandante presentó con su escrito de fecha 01 de octubre de 2015 el Convenio Marco de Pago de Remuneración Equitativa y Única por la Comunicación Pública de Fonogramas Musicales de fecha 01 de abril de 2015, suscrito entre UNIMPRO y la Asociación Peruana de Televisión por Cable – APTC, de la cual forma parte la demandante, de esto se desprende que las partes acuerdan las tarifas correspondientes a los años 2015 y 2016 estableciendo un cuadro de tarifas que oscilan desde S/ 100.00 a S/ 1,540.00 mensuales, según el número de usuarios que tenga cada empresa; entendiéndose en ese sentido, que el convenio en mención recién surtirá efectos entre las partes a partir del 01 de abril de 2015 en adelante.

De igual forma, adjunta recibos⁶ de pago correspondientes al año 2015, de los cuales se aprecia que durante dicho periodo, la demandante cumplió con pagar las remuneraciones equitativas y únicas por la comunicación pública de fonogramas musicales correspondientes a los meses de abril a agosto del 2015; sin embargo, revisado los dos tomos del expediente administrativo no se observa documento que demuestre que la demandante haya cumplido con efectuar el pago de las remuneraciones reclamadas por UNIMPRO correspondientes al periodo de julio de 2009 a marzo de 2012 a pesar de haber sido intimado en mora mediante carta notarial de fecha 15 de marzo de 2012; por lo que, habiendo vencido el plazo de los diez días señalados en el artículo 202 del Decreto Legislativo 822, resulta claro que la demandante infringió las normas correspondientes a la Ley sobre Derecho de Autor.

A mayor abundamiento es preciso señalar que de autos no se desprende que la demandante haya cuestionado o negado haber utilizado los fonogramas

⁶ Fojas 353 a 357 del Tomo II del expediente administrativo.

mencionados por UNIMPRO, como son las obras musicales: “Achilipu”, interpretada por El Gran Combo; “Así te quería ver”, interpretada por la agrupación musical “Agua Bella”; “Billie Jean”, interpretada por Michael Jackson; “Te regalo amores”, interpretada por “Rakim y Ken-y”, “Qué linda flor”, interpretada por Silverio Urbina; “Mueve tu cintura”, interpretada por “Los Conquistadores de Salsa”; “Magdalena, Mi amor (Kimbara)” interpretada por la agrupación DLG; por consiguiente, queda claro que si hubo uso de dichos fonogramas por parte de la demandante.

En ese sentido, estando obligada la demandante por mandato de ley a realizar el pago de las remuneraciones reclamadas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 137 del Decreto Legislativo 822, a esta le correspondía abonar las remuneraciones correspondientes al periodo de julio de 2009 a marzo del 2012; por lo que, no corresponde amparar este extremo de sus agravios.

SETIMO.- De la misma forma, se advierte que el demandante cuestiona el hecho las tarifas a las que hace mención UNIMPRO no le son aplicables por cuanto las mismas no cumplieron con el principio de publicidad para ser exigibles.

En cuanto a este extremo apelado, es preciso mencionar que, revisado el expediente administrativo, del recurso de apelación presentado por la demandante en instancia administrativa⁷ no se advierte que haya cuestionado dicho aspecto; por consiguiente, no corresponde amparar el mismo. Sin embargo, sin perjuicio de ello, es preciso señalar que a fojas 127 y 128 del expediente principal se observa que UNIMPRO cumplió con adjuntar las publicaciones de las tarifas correspondientes a los años 2009 y 2010, en el diario “AJA”; por consiguiente, queda desvirtuada la falta de publicidad alegada por al demandante. Por lo antes mencionado, no corresponde amparar este extremo apelado.

OCTAVO.- Siendo así, bajo los fundamentos antes expuestos corresponde desestimar los agravios alegados y confirmar la sentencia apelada que declaró infundada la demanda.

III.- DECISIÓN:

Por lo expresado:

⁷ Fojas 191 a 195 del Tomo I del Expediente Administrativo.

CONFIRMARON la **sentencia** contenida en la Resolución Número Diez de fecha 30 de junio de 2022 que declaró infundada la demanda, de fojas 63 a 73. En los seguidos por CATV SYSTEM E.I.R.L. contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -Indecopi y otro, sobre nulidad de resolución administrativa. ***Notifíquese y devuélvase.***

VINATEA MEDINA

ROSSEL MERCADO

REYES RAMOS